Expte. Nº 11676/2023-1-C.-

Resistencia, 29 de abril de 2025.-

Resolución Nº 177.-

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"BREST, MARTHA GRACIELA C/ PROVINCIA DEL CHACO; INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PRESTAMOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/ ACCION DE AMPARO"** Expte. Nº 11676/2023-1-C, venidos en grado de apelación del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de esta ciudad y;

CONSIDERANDO:

I. Que arriban las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 31/03/25 contra la decisión de fecha 25/03/25. Concedido el 31/03/25, no fue contestado por la contraria.-

Recibidas las actuaciones por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, quedaron radicadas ante esta Sala Cuarta (24/04/25), notificándose los interesados. Consentida la intervención de los suscriptos, la causa ha quedado en estado de ser resuelta.-

II. a. En el caso en consideración, en fecha 13/08/24, el Sr. Juez aquo hizo lugar a la demanda de Amparo promovida por la Sra. Martha Graciela Brest y, en consecuencia, ordenó a la accionada el cese inmediato de los descuentos efectuados sobre sus haberes jubilatorios derivados de la aplicación del tope establecido por la Ley 3272-H. Asimismo, dispuso la reliquidación de los mismos y el pago de las diferencias resultantes desde la implementación del tope jubilatorio, puntualizando que el capital condenado devengaría un interés de Tasa Pasiva para Uso de Justicia BCRA (Banco Central de la República Argentina), desde la fecha en que se otorgó el beneficio jubilatorio (07/07/2023); y una vez efectuados los cálculos pertinentes, el resultado obtenido debería duplicarse, hasta su total y efectivo pago.-

Firme el aludido decisorio, el 19/11/24 la demandada practicó planilla la cual fue impugnada por la actora el 21/11/24. A su vez, el 16/12/24 la accionante efectuó su propia liquidación.-

Dispuesta vista a la Oficina de Peritos Contadores del Poder Judicial, la aludida dependencia contestó el 07/02/25, señalando que ninguna de las liquidaciones faccionadas se ajustaba a los términos expuestos en la sentencia, conforme los argumentos y cálculos que desarrolló. Seguidamente a

Expte. Nº 11676/2023-1-C.-

ello, efectuó un nuevo cálculo, aplicando estrictamente los parámetros establecidos en la decisión definitiva.-

El 25/03/25 el magistrado de grado rechazó las objeciones formuladas por ambas partes a la planilla practicada por el citado organismo, y aprobó la planilla practicada en \$2.344.787,30.-

b. Contra ello interpuso recurso la parte accionante, en los términos que se reseñan seguidamente.-

Se agravió, en primer lugar, de que se apruebe la planilla de Peritos Contadores, pese a que en dicho informe se reconoció que el procedimiento, y en consecuencia la planilla presentada por su parte, era correcto, por así resultar establecido en la ley. Citó causas en las que la accionada utilizó el mecanismo previsto por el art. 144 de la Ley 800 H para realizar el cálculo pertinente.-

Se quejó en segundo término del criterio disímil utilizado por el aquo para aprobar la planilla en el caso, que no se condice con el establecido en causas similares. Refirió al sistema de valoración de la prueba conforme a la sana crítica y la necesidad de aplicar la lógica en el razonamiento judicial.-

Como tercer agravio, puntualizó que la falta de aprobación de la planilla confeccionada por su parte, acorde a derecho y a otros antecedentes jurisprudenciales, afectaba la seguridad jurídica y la igualdad, no pudiendo la ley otorgar en casos similares, derechos distintos.-

Solicitó se revoque el decisorio y se apruebe la planilla de conformidad a las pautas del fallo "Smith" del Superior Tribunal de Justicia, finalizando con petitorio de rigor.-

III. De conformidad a los agravios supra sintetizados, se agravia la recurrente de que la planilla se apruebe en forma disímil a los parámetros tenidos en cuenta en casos similares y en discordancia con lo dispuesto por el art. 144 Ley 800H y antecedente del Máximo Tribunal local.-

En la tarea de dar respuesta a la crítica así planteada, cabe señalar que la misma Oficina de Peritos Contadores, al responder la vista conferida el 07/02/25, indicó que si bien el procedimiento utilizado por la actora (art. 144 Ley 800-H) para faccionar la planilla en el caso era correcto, no se condecía con el establecido en la sentencia recaída en la causa. Asimismo, aclaró la aludida dependencia que la tasa de interés utilizada por la accionante (pasiva)

Expte. Nº 11676/2023-1-C.-

no se ajustaba a lo establecido en el fallo "Smith" del STJ, en el cual se estipuló la aplicación de una tasa pura, a los fines de resarcir únicamente la indisponibilidad del capital.-

Cabe señalar que en el memorial presentado nada dice la accionante respecto a tales consideraciones, limitándose a sostener la falta de coincidencia del criterio utilizado en la causa respecto a otros expedientes similares y como ello afectaría la seguridad jurídica y el principio de igualdad.-

Con relación a tales manifestaciones cabe puntualizar que los términos de la Sentencia Definitiva recaída el 13/08/24 fueron claros al establecer la forma de condena y forma de liquidar las diferencias salariales resultantes. Se determinó entonces que debían pagarse las diferencias resultantes desde la implementación del tope sobre los haberes jubilatorios de la actora y que el capital devengaría un interés de Tasa Pasiva para Uso de Justicia BCRA desde la fecha en que se otorgó el beneficio jubilatorio (07/07/2023); y una vez efectuados los cálculos pertinentes, el resultado obtenido debería duplicarse, hasta su total y efectivo pago.-

Dicha forma de cálculo si bien, efectivamente, no coincide ni con lo expresamente estipulado por el art. 144 Ley 800H ni con el antecedente respecto a la forma de liquidación de intereses sentado por el Máximo Tribunal local en Sent. Nº 105 del 04/05/2015 ("Smith"), se encuentra firme, por no haber sido objeto de aclaratoria ni de ningún otro tipo de recurso en la oportunidad procesal pertinente.-

De ello surge que la impugnación que hoy se trae a consideración respecto a la forma de cálculo allí establecida, resulta a todas luces extemporánea, no correspondiendo en este estadio procesal su consideración.-

En efecto, habiendo la accionante consentido los términos recaídos en el decisorio de grado que estableció la forma de liquidar la deuda, dejando vencer los plazos recursivos de aclaratoria y apelación, dicha circunstancia impide el cuestionamiento pretendido en esta instancia, como derivación del principio procesal de preclusión.-

En relación al mismo, se ha señalado que el ordenamiento procesal tiene consagrado un sistema de plazos perentorios; y el efecto propio de dichos plazos -también llamados en doctrina preclusivos o fatales- es la pérdida irreversible del derecho que se haya dejado de ejercer dentro del término sin

Expte. Nº 11676/2023-1-C.-

necesidad de declaración judicial ni petición alguna de parte (cit. en Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales, T. II-B, Ed. Platense- Abeledo-Perrot 1985, p. 867).-

Conforme lo anterior, "Es principio ampliamente aceptado que resultan irrecurribles todas aquellas resoluciones que son meras consecuencias de otras dictadas con anterioridad que se encuentran firmes, o sobre las cuales han operado los efectos de la preclusión. En virtud de tal principio procesal toda cuestión resuelta en el litigio, sin que haya sido atacada en tiempo oportuno por la vía pertinente, adquiere firmeza y no puede ser renovada en el mismo proceso (Conf. Morello y otros, "Códigos Procesales", Ed. Platense 1988, T. III. p. 159 y ss. y Res. 09/13, esta Sala).-

En el mismo sentido se han expedido la Corte Suprema de la Nación declarando la inviabilidad del agravio cuando los recurrentes se han sometido a una determinada decisión judicial, respecto de cuyas consecuencias no puede alegarse posteriormente la violación de alguna garantía constitucional (Fallos 249:466); y el Superior Tribunal de Justicia local señalando que resulta inviable el agravio derivado de un pronunciamiento anterior al recurrido por vía del recurso extraordinario y que fuera consentido por la parte (Conf. Resol. Nº 116/86), doctrina que resulta aplicable a los recursos ordinarios.-

Corolario de lo expuesto, entrar a revisar en este estadio procesal el tipo de intereses que corresponde adicionar a la condena, importaría reeditar cuestiones firmes con total desmedro del referido principio de perentoriedad de reconocido orden público.-

A ello cabe adicionar que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente cuando denuncia afectación de los principios de seguridad jurídica e igualdad, en tanto su consentimiento de los términos de la sentencia se presume ante la falta de cuestionamiento, es el recurso pretendido en esta instancia el que resulta susceptible de afectar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad de la contraparte.-

Ello por cuanto, y sin perjuicio de la efectiva aplicabilidad del criterio "Smith" en supuestos semejantes, en el caso de autos, la posibilidad de corregir tal cuestión deviene improcedente por importar un intento de rectificar una conducta asumida con anterioridad, que ya ha generado expectativas en la parte contraria, respecto al modo de cómputo de la deuda.-

Expte. N° 11676/2023-1-C.-

Es que por aplicación de la doctrina de los actos propios, se encuentra vedado a los sujetos del proceso desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior, que por su trascendencia y eficacia ha permitido despertar en otro ciertas y fundadas expectativas. En este sentido, se ha puntualizado que "La confianza que se ha generado con el propio obrar no puede ser traicionada... lo que equivale a sostener que resulta inadmisibile una pretensión que importe ponerse en contradicción con una conducta previa, deliberada y consciente, en tanto ésta resulte jurídicamente relevante y plenamente eficaz (SCJ Bs As., Perri, Pascual y otros c. Bruno Bianchi S.A., 16/06/2004, La Ley Online, cita: AR/JUR/2662/2004).-

Todo ello, máxime, que el principio dispositivo que rige el proceso civil impone a las partes su debido contralor, y la formulación de los oportunos planteos tendientes al adecuado resguardo de sus derechos. De no hacerlo así, lo que acaezca en cada caso se debe a su propia conducta discrecional, impidiendo la invocación de agravio constitucional alguno deviniente de dicha circunstancia (Conf. Res. 271 bis, del 13/10/16, Expte. N° Expte. N° 82/16-1-O).-

Corolario de todo lo expuesto, se rechaza la apelación interpuesta.-

IV. Las costas se imponen a la parte actora vencida, como derivación del principio objetivo de la derrota plasmado en el art. 83 CPCC.-

Respecto a los honorarios de Alzada, los mismos se regulan con la base del interés defendido, definido por la diferencia entre la planilla cuya aprobación pretende la recurrente (\$10.186.270,52 conf. presentación del 16/12/24) y la aprobada en la instancia de grado (\$2.344.787,30), es decir \$7.841.483,22. Sobre el mismo se aplican las pautas establecidas por los arts. 3, 5 (14%), 7 (80%), 27 (20%) y 11 (45%) de la Ley 288C, fijándose en la forma que se establece en la parte resolutive.-

Por los fundamentos expuestos, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial;

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en fecha 31/03/25 contra la decisión de fecha 25/03/25, por los motivos expuestos en los Considerandos que anteceden.-

II. IMPONER las costas en la Alzada a la apelante vencida y

Expte. Nº 11676/2023-1-C.-

REGULAR los honorarios del **Dr. Fabian Gustavo Sisul (MP Nº 6658)** en **PESOS SETENTA y NUEVE MIL CUARENTA y DOS CON QUINCE CENTAVOS (\$79.042,15)** y **PESOS TREINTA y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA y SEIS CENTAVOS (\$31.616,86)** atento su doble carácter. Con más IVA e intereses si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley.-

III. NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.-

Diego Gabriel Derewicki
Juez-Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com.

Fernando Adrián Heñin
Juez- Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com.

El presente documento fue firmado electronicamente por: **DEREWICKI DIEGO GABRIEL**, DNI: 22002760, JUEZ DE CAMARA, **HEÑIN FERNANDO ADRIAN**, DNI: 23273906, JUEZ DE CAMARA.